

## **Jaydocsil Abogados Asociados**

*Servicios de Asesoría y Consultoría  
Avenida Jiménez No. 8-77 oficina 706  
3142476344 y 3165284109*



**Doctor (a)**

**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI ( REPARTO)**

E.....S.....D

**Referencia: Acción de NULIKDA Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

**Demandante JOSE WILSON PRIETO HURTADO**

**Demandada: Caja de Sueldos de Retiro Policia Nacional**

La Suscrito **IDALIDES SILVA ARTEAGA**, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, en mi calidad de apoderada <sup>(conforme a poder anexo)</sup> del señor JOSE WILSON PRIETO HURTADO, en forma comedida acudo a ese Despacho para formular DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contra LA NACIÓN – CAJA DE SUELDOS DE RETIRO -POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, representada por el señor Coronel ® GUSTAVO CAÑAS CARDONA, o quien haga sus veces a la hora de notificación, para que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 138, del Código Contencioso Administrativo y el trámite establecido en los Artículos 179 y S.S. ibídem, a esa Honorable Corporación con citación y audiencia del señor Agente del Ministerio público, se profieran las siguientes :

### **I. PARTES DEL PROCESO**

Están constituidas por:

#### **1. PARTE DEMANDADA:**

1.1CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL, establecimiento Público del orden Nacional, con personería jurídica, autónoma administrativa y financieramente, representada legalmente por su Director Coronel ® GUSTAVO CAÑAS VILLAMIZAR, persona mayor y domiciliada en Bogotá o quien haga sus veces al momento de su notificación.

#### **2. PARTE DEMANDANTE:**

2.1. JOSE WILSON PRIETO HURTADO, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Armenia, identificado con Cedula de Ciudadanía No.75'527.326 expedida en Armenia Quindio.

## II. PRETENSIONES QUE SE QUIEREN CONCILIAR

**PRIMERA:** Que se declare la nulidad del acto administrativo contentivo en el oficio No. 521/ GAG-SDP de fecha 01 de febrero de 2012,; suscrito por el señor Coronel ® GUSTAVO CAÑAS CARDONA Director General; a través del cual la entidad demandada CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL, se niega al reconocimiento, re-liquidación, reajuste y pago de la Asignación de Pensión de que actualmente devenga mi prohiado JOSE WILSON PRIETO HURTADO, *incluyendo lo preceptuado en el Decreto 1212 de 1.990 partidas estipuladas o factores computables de los artículos 68, 71, 82 y 214 del Decreto precitado en los porcentajes y tiempos correspondientes, teniendo en cuenta que previamente a homologarse ya venía disfrutando de estas prebendas que es la norma más favorable al actor como trabajador, y que regula su situación laboral antes de su homologación y que es el referente legislativo para NO DESMEJORARLE la situación salarial ni prestacional en ningún aspecto.*

- a) **Prima de actividad en el porcentaje que legalmente le corresponda**
- b) **Prima de antigüedad**
- c) **Bonificación de buena conducta.**
- d) **Subsidio familiar en un porcentaje del 43%**
- e) **Cesantías con retroactividad**

**SEGUNDA:** Que como consecuencia de lo anterior y a manera de restablecimiento del Derecho se condene a la entidad demandada CAJA DE SUELDOS DE RETIRO POLICIA NACIONAL, a reliquidar, reajustar su pensión mensual; y pagarle estos porcentajes sobre el tiempo real de cotización y sobre las primas y subsidios con base en el sueldo básico devengado al momento del retiro del actor, factores establecidos en el Decreto 1212 de 1990 ( art.30, 68, 71, 74 y 214) y los factores prestacionales establecidos en el artículo 23,numeral 23.1 del Decreto 4433 de 2004, a partir de la fecha de su retiro.

**TERCERA:** Que como consecuencia de lo anterior y a manera de Restablecimiento del Derecho, y teniendo en cuenta que al momento de homologarse, el Decreto 1091 de 1995, no contemplaba el grado de **INTENDENTE JEFE**, el cual fue introducido posteriormente mediante el Decreto 1791 de 2000, por tanto no podía ser desmejorado en ningún aspecto; en el momento de su retiro debía ostentar el grado de **COMISARIO**, en consecuencia, la re liquidación y reajuste de los partidas pensionales se hagan con el grado de **COMISARIO**; lo anterior de conformidad a la Constitución Política, artículos 2, 5, 42, 53 y 218; La ley 4 de 1992, artículo 2 y La ley 180 de 1995, parágrafo del artículo 7°, y que dichos reconocimientos se reajusten permanentemente a las partidas computables antes mencionadas, durante todo el tiempo que dure percibiendo la mesada.

**CUARTO:** Como consecuencia de lo anterior y a titulo de restablecimiento del Derecho, se condene a la entidad demandada a reconocer, reajustar, liquidar y pagar los aumentos salariales correspondientes mes por mes a la fecha, teniendo en cuenta el **Índice de Precios al Consumidor (I.P.C)** para aquellos años en que deba aplicar de conformidad con la ley 238 de 1.995 que adicionó el artículo 279 de la ley 100 de 1993, permitiendo que las pensiones señaladas y reconocidas bajo el imperio de normas especiales se puedan incrementar por los métodos descritos en los artículos 14 y 142 de la ley 100 de 1993, y que en consecuencia se me reconozca los intereses en los numerales precedentes, así como la respectiva indexación aplicando la fórmula matemática que para estos casos ha establecido el Honorable Consejo de Estado, pues dicho Índice, no se ha aplicado en aquellos años en que debían haberlo tenido en cuenta en la liquidación de su asignación mensual de retiro.

**QUINTO:** Igualmente deberá pagar los intereses moratorios exigibles a partir de la causación de las partidas computables en la asignación de Retiro o pensión desde el 26 Febrero de 2011 fecha en que debió hacerse el reconocimiento de las partidas computables como lo son la prima de actividad, prima de antigüedad, subsidio familiar en su totalidad, Bonificación por buena conducta en la asignación de Retiro o pensión, mes por mes sobre el mayor valor de la pensión reajustada y hasta cuando se cancele efectivamente dicho reajuste.

**SEXTO:** Que se ordene la actualización de la condena dispuesta en base en el artículo 192, 193 y 195 C:C:A, indexándose las sumas. De igual manera, por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la formula de actualización se aplicara separadamente, mes por mes, comenzando con la correspondiente a la fecha en que se causo la prestación, teniendo en cuenta que el índice es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

### **III. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA CONCILIACION**

1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional es la entidad pagadora de la Policía Nacional, es una entidad de derecho Público, con personería jurídica patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, lo que la legítima para ser sujeto de derecho y obligaciones ya para ser vinculada como parte procesal pasiva en el ejercicio de esta acción.
2. El señor JOSE WILSON PRIETO HURTADO, prestó sus servicios de manera continua a la Policía Nacional de Colombia desde el 01 de enero de 1988 al 26 de febrero de 2011.
3. El 01 de julio de 1987 ingresó a la Escuela Nacional de Carabineros, culminando satisfactoriamente el curso y dado de alta como Agente el 01 de enero de 1988, mediante Resolución No. 007740, como consta en hoja de servicios.
4. Mediante Resolución No. 00608 del 30 de enero de 1992, fue ascendido al grado de Suboficial, el cual se encuentra reglado por los decretos 1212 de 1.990, régimen que le es aplicable al actor y que señala que para gozar de asignación de retiro como mínimo debe haber cumplido quince años de servicio.
5. Mediante Resolución No. 03211 del 31 de octubre de abril de 1997, fue homologado al Nivel Ejecutivo, en atención las garantías ofrecidas por el mando institucional y acogiéndose a las prebendas prestacionales que ofrecía la ley que desarrolló en Nivel Ejecutivo, la cual establecía que los que se pasaran a dicho nivel **no podían ser desmejorados ni discriminados en ningún aspecto**.
6. El demandante fue retirado en el grado de Subcomisario con 23 años once meses y veintidós días.
7. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante resolución No. 001403 del 17 de marzo de 2011; se pronuncia; reconoce y ordena el pago de un sueldo básico, una asignación mensual con partidas liquidables así, Prima Retorno a la Experiencia, Prima de navidad, prima de servicios y prima de

vacaciones en un porcentaje de una doceava parte, subsidio de Alimentación dejando por fuera otros de sus derechos adquiridos como las primas que aquí se solicitan, sin ninguna motivo al respecto.

8. Mediante Derecho de Petición radicado con fecha 7 de octubre de 2011; dirigido a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL-CASUR, entidad demandada, el actor solicito la re liquidación y pago de su asignación y demás prestaciones sociales en el porcentaje correspondiente al grado y tiempo de servicio por el concepto de Prima de Antigüedad, Prima de Actividad, subsidio Familiar, Prima de Actualización, Bonificación de buena conducta; de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 1212 de 1990, decreto 2070 de 2.003, la Ley 923 de 2.004 y el Decreto 4433 de mismo año. La entidad demandada dio respuesta según oficio 521 del 01 de febrero de 2012, suscrito por el Director de la Caja de Sueldos de Retiro, dando respuesta negativa al derecho reclamado.

9. La entidad demandada dio respuesta según oficio 521 del 01 de febrero de 2012, suscrito por el Director de la Caja de Sueldos de Retiro, dando respuesta negativa al derecho reclamado basada en los siguientes argumentos:

(... ) se constato que esta entidad le reconoció asignación de retiro a partir de diciembre de 2008, tomando para la liquidación y prestación, el sueldo y las partidas computables establecidas en el Decreto 1091 de 1995 del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en concordancia con el decreto 4433 de 2004, normas de carácter especial, mediante las cuales se expide el Régimen de asignaciones y prestaciones para el personal de Nivel Ejecutivo de la policía Nacional, entre otros, sin incluir como factor integrante de la prestación, la Prima de Actividad, Prima de Antigüedad y Subsidio Familiar, por cuanto el señor retirado pertenece al Nivel Ejecutivo, Norma Distinta a las demás categorías del sistema Pensional de la Fuerza Pública...(.)

En cuanto a la re liquidación aplicando las partidas que trata el Decreto 1212 de 1990, por mandato legal dichas partidas no son aplicables, así taxativamente lo ordena el parágrafo único del artículo 49 del decreto 1091 de 2005.

En cuanto al IPC argumenta que es por mandato Constitucional que la Fuerza Pública goza de un régimen especial, tanto para el reajuste de sueldos básicos para el personal en actividad tanto para el reajuste de las asignaciones de Retiro, gozando del poder adquisitivo constante....describe unos decretos sobre los aumentos anuales decretados por el Gobierno que nada tienen que ver con las normas aplicables y que se controvierten en este caso

10. Como se evidencia por parte de la entidad accionada vulnera de manera flagrante los requisitos que debe tener la respuesta a un derecho de Petición, exigencias el de oportunidad que debe tener la respuesta a un derecho de petición, oportunidad que debe resolverse de fondo, claro, preciso y de manera congruente con lo solicitado además de que se está desconociendo los derechos a la Igualdad, Favorabilidad y principio de Oscilación que protege al demandante.
11. El Régimen aplicable al actor es el consagrado en el decreto 1212 de 1.990 en consonancia de compatibilidad por los derechos adquiridos en ambos regímenes, es decir también es beneficiario de lo referente a lo que regula para el personal que ingreso a la Policía Nacional al Nivel ejecutivo directamente, habida cuenta que mi poderdante se vinculo a la institución antes de entrar en vigencia el Decreto 1091 de 1.995 y posteriormente se traslado al nivel ejecutivo.

12. Los estatutos de carrera de la fuerza pública desde la ley 2 de 1945 consagran derechos que a través del tiempo se constituyen en DERECHOS ADQUIRIDOS, entre ellos la prima de actividad, la prima de antigüedad, el subsidio familiar, prima de actualización y la bonificación de buena conducta, que están consagrados en el Decreto 1212 de 1990, y Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, Decreto 1091 de 1995, ley 923 de 2004 y Decreto 4433 de 2004, primas, subsidio y bonificaciones que el señor PREITO HURATDO venía gozando, así como la retroactividad de las cesantías. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional de manera unilateral no reconoció, liquidó ni pago, ya que era un derecho adquirido al que no podía renunciar de conformidad con el Mandato Constitucional (Art. 1, 2, 13, 25, 53 y 93).
13. En la Audiencia de Conciliación convocada para el día 28 de junio como puede observarse en acta anexa, la entidad convocada no asistió y en respuesta a las pretensiones hechos y fundamentos de Derechos expresados, la apoderada remite por correo certificado presenta excusas y e informa la posición del Comité de Conciliación, donde se advierte claramente que no tenían un conocimiento claro sobre el tema a tratar, habida cuenta que se les hizo traslado de la solicitud y hacen alusión a unas normas y pretensiones que no fueron incluidos en la solicitud.
14. Como lo argumento en los acápites siguientes, el régimen especial de la Fuerza Pública no puede ser un escudo para que continuamente se le estén vulnerando sus derechos, la jurisprudencia Colombiana de la cual aporte algunos pronunciamientos en especial la última del Consejo de Estado de fecha 12 de abril de 2012, expediente 1074; al declarar la nulidad del parágrafo 2° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2.004, expedido por el Gobierno Nacional, por medio del cual fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros del personal del nivel ejecutivo de la Policía muy claramente expresa;

(.....)

*la expedición de los decretos dictados en desarrollo de una Ley marco, goza de una mayor amplitud, ello no constituye autorización para desbordar o desconocer el mínimo de los elementos que la Ley ordena tener en cuenta para su perfeccionamiento. Lo anterior quiere decir que el Congreso en la Ley marco no agota la materia de que se trate y se circunscribe a fijar unas pautas generales y señalar unos lineamientos que al ejercer la función de reglamentación, no puede desconocer el Gobierno Nacional. Se precisa, en consecuencia, que el decreto acusado tiene por límite la Ley marco y que so pretexto de desarrollarla no puede modificar sus elementos. De lo anterior se concluye la imposibilidad para el Gobierno de introducir disposiciones que desvirtúen la voluntad del legislador, pues los límites de esta facultad*

*No obstante, el ejecutivo se excedió en su potestad reglamentaria estableciendo un nuevo régimen más gravoso y asaltando la buena fe, por cuanto se trasladaron a ese nivel antes del 27 de junio de 1995, cuando aún no se había expedido el decreto 1091, no siendo entonces conscientes de esa nueva regulación, pues su situación se hallaba amparada por el parágrafo del artículo 7° de la Ley 180; y no podía establecer requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho que ya estaba reglamentado en los decretos 1212 y 1213 de 1990.*

Así las cosas tiene derecho adquirido, cierto e indiscutible a que mi poderdante obtenga el restablecimiento de sus derechos, a que se le re liquide y modifique su hoja de servicios, y como consecuencia también se le reajuste su mesada pensional, además de que se le cancele todos los dineros dejados de percibir en forma unilateral y que desmejoraron su calidad de vida, y que fueron reiterados con sentencia del Consejo de Estado de fecha 12 de abril de 2012 y que declara la nulidad del parágrafo 2° del artículo 25 del decreto 4433 de 2004, fallo 1074.

#### IV. NORMAS VIOLADAS

Invoco como normas violadas por la entidad aquí convocada las siguientes:

Constitución Política de Colombia artículos 1, 2, 5, 6, 13. 48 y 53.

Ley 4 de 1992 artículo 2º literal a.

Ley 180 de 1995, artículo 7º Parágrafo.

Ley 923 de 2004

Decreto 1212 de 1990 Título III artículos 30, 33 ss.

Decreto 1029 de 1994, artículo 111 y 113.

Decreto Ley 132 de 1995, artículo 82.

Decreto 4433 del 311204 artículo 3º.

Código Sustantivo Laboral, artículos 127, 149, 340.

Convenio 55 y 95 de la O.I.T, aprobado por la ley 54 de 1962

#### V. **CONCEPTO DE LA VIOLACION**

La Constitución Política de Colombia declara en su artículo 1º; que Colombia es un Estado Social de Derecho, lo que otorga un sentido nuevo a la integridad del orden Jurídico, especialmente frente a la Dignidad Humana, que es uno de los valores esenciales de nuestra organización Política.

***Artículo 1o.*** Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Entre los fines Esenciales del Estado y que a ellos hago mención en esta litis, a cuyos fines deben obedecer todas las entidades adscritas al Estado de una u otra forma de vinculación, están:

***Artículo 2º-*** Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

*Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.*

Otra de las normas vulneradas y se puede observar claramente en la respuesta de la Caja de Sueldos de Retiro Policial Nacional es la discriminación y desmejora al no reconocerles derechos adquiridos con anterioridad alegando que ya el Gobierno Nacional había expedido unos Decretos que establecían parámetros para llevar a cabo los reajustes de los salarios tanto para el personal activo como retirado, como normas especiales, por ser la Fuerza Pública un Régimen Especial, habida cuenta de la desigualdad y Resquebrajamiento tajante de sus derechos, y son los siguientes:

**Artículo 5º.**-El Estado reconoce, **sin discriminación alguna**, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

**ARTICULO 6o.** Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

**ARTICULO 13.** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

**ARTICULO 48.** La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

**ARTICULO 53.** El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

***Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.***

***El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.8 CONCORDAN CIA ley 717 de 2001, Ley 758 de 2002.***

***Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. ( ley 13 de 1.992, Ley 52 de 1993, Ley 347 de 1997, Ley 378 de 1997, ley 704 de 2001.***

***La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores (***

Siendo como es la Constitución Normas de Normas, es evidente que se vulnero los derechos de mi prohiado desde su primer artículo, no se tuvieron en cuenta los fines constitucionales y legales que cobijaban la labor desempeñada por PRIETO HURTADO por más de 20 años en la Institución Policial, su estabilidad pensional entre otras.

En aras de la Protección constitucional consagrada en los artículos anteriores, el gobierno Nacional expidió la Ley 4ª de 1.992, que establece:

**ARTÍCULO 2o.** *Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes objetivos y criterios:*

**a)** *El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;*

Parámetros Constitucionales y Legales que se han incorporado en forma expresa en cuando se reglamentaron las diferentes carreras profesionales en la Policía Nacional, y que han sido plasmados en las diferentes normas subsiguientes y de las cuales me permito allegar algunas para sustentar mejor el concepto de la Violación normativa:

**LEY 180 DE 1995**

*Diario Oficial, No. 41.676, de 13 de enero de 1995*

*por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficinas, Suboficiales y Agentes.*

**ARTÍCULO 7o.** De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por el término de noventa (90) días, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, para los siguientes efectos:

**PARÁGRAFO.** La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo

Aún y previo a este se promulgaron otros Decretos Vigentes actualmente y encontrándose mi Mandante en el escalafón de Suboficial y ostentando el grado de Cabo segundo de la Policía Nacional, como son además de **LOS DECRETOS 097 DE 1989, EL DECRETO 1212 DE 1990** en los que se le reconocía, como se cito anteriormente una PRIMA DE ACTIVIDAD en un porcentaje del 30 por ciento, mas una PRIMA DE ANTIGÜEDAD del 10 por ciento luego de cumplidos los diez primeros años de servicio y un uno por ciento por cada año de más de servicio; igualmente le reconocía un SUBSIDIO FAMILIAR, y el pago de los DISTINTIVOS DE BUENA CONDUCTA PARA SUBOFICIALES al que pertenecía el señor JOSE WILSON PRIETO HURATADO de acuerdo al Decreto 1212.

Así mismo dicho Decreto 1212-90, estipula las causales de disminución del subsidio familiar, así:

*“ARTÍCULO 83. DISMINUCION DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Disminuye por razón de los hijos así:*

*a. Por muerte.*

*b. Por matrimonio.*

*c. Por independencia económica.*

*d. Por haber llegado a la edad de veintiún (21) años.*

**PARAGRAFO.** Se exceptúan de lo contemplado en el literal d. los hijos estudiantes hasta la edad de veinticuatro (24) años y los hijos inválidos absolutos, cuando dependan económicamente del oficial o suboficial.



Y en el artículo 84 ídem, estipula la EXTINCIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR- por razón del cónyuge en los siguientes casos:

*“ARTÍCULO 84. EXTINCIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR. El subsidio familiar se extingue por razón del cónyuge en los siguientes casos:*

*a. Por muerte del cónyuge.*

*b. Por cesación de la vida conyugal en los siguientes casos:*

*1. Por declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio.*

*2. Por sentencia judicial de divorcio, válida en Colombia.*

*3. Por separación judicial de cuerpos.*

*PARAGRAFO. Se ordenará la extinción cuando se presenta alguno de los casos anteriores, siempre que no hubiere hijos a cargo, por los que exista el derecho a percibir el subsidio familiar.”*

Siendo este Decreto tan sabio, consagró en su artículo 54, el cual cita: *“...ARTÍCULO 89. PROCEDIMIENTOS. Los reconocimientos, aumentos, disminuciones, extinciones y suspensiones de los subsidios y primas relacionados en el presente Capítulo y de la prima de antigüedad jurisdiccional, SE ORDENARÁN MEDIANTE DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.* (Resaltados fuera de texto) así igual lo ordenó el Código Contencioso Administrativo en su artículo 69.

Como puede observarse a mi poderdante no le convergen ninguna de estas causales de extinción del Subsidio y sin embargo no le fueron reconocidos estos derechos.

Entre tanto, en el título X, DISPOSICIONES VARIAS, artículo 174 dispuso: *“...PROCEDIMIENTOS. Los reconocimientos, aumentos, disminuciones, extinciones y suspensiones de los subsidios y primas relacionados en el presente Capítulo y de la prima de antigüedad jurisdiccional, se ordenarán mediante disposición de la Dirección General de la Policía Nacional.”*

Siguiendo con el génesis y las leyes que dieron origen al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en desarrollo de las normas generales en la Ley 4ª de 1992, nació a la vida jurídica el 20 de mayo de 1994 el decreto 1029 “por el cual se emite el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional”, el cual creó en el artículo 8º **LA PRIMA DEL NIVEL EJECUTIVO** y en el 9º **“LA PRIMA DE RETORNO A LA EXPERIENCIA”**, procediendo la Policía Nacional unilateralmente y en forma ilegal e inconstitucional, a suprimir las primas de que venían gozando como Suboficial sin expedir acto administrativo alguno que disminuyera, extinguiera y/o suprimiera los subsidios y primas relacionados y que por ley y Constitución no se podía obrar así, por cuanto el Decreto en mención (1029/94) ordenó en su artículo 111: *“...ARTÍCULO 111. RECONOCIMIENTO DERECHOS PRESTACIONALES. A partir de la vigencia de este Decreto, los derechos consagrados en los Decretos ley números 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, para el cónyuge y los hijos de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, se reconocerán y pagarán a la familia, de conformidad con la definición contenida en el artículo 110 de este Decreto.”* y sin existir acto administrativo como lo ordena el artículo 113 ídem que dispuso: *“...PROCEDIMIENTOS.- El reconocimiento, aumento, modificación, extinción y suspensión de las primas relacionadas en el presente capítulo, se ordenará mediante disposición de la Dirección General de la Policía Nacional”,* pero como ya estaba establecido el acto administrativo con anterioridad, la Policía Nacional, no podría efectuar otro que violara los derechos adquiridos por el personal que se homologó de agente o suboficial al nivel ejecutivo, además que si lo hubiere hecho, éste se debía haber notificado a los mismos y concederles el recurso de apelación ante el Ministerio de Defensa Nacional, situación que la Policía a través de la CASUR aún no ha hecho y que por lo tanto la obliga a cancelar estas primas, subsidios y distintivos de que gozaba en el momento de ser suboficial.

Sobre lo anterior y respecto al **subsidio familiar**, el honorable Consejo de Estado el 24 de octubre de 1996, por medio de la sala de consultas y servicio civil, radicado número 886, ante consulta que le fuere hecha por el Ministerio de Defensa respecto a la vigencia de los artículos **110 y 111 de Decreto 1029 de 1994**, a pesar que la honorable Corte Constitucional en sentencia **C-417/94**, declaró inexecutable el Decreto ley 41 de 1994 por extralimitarse el ejecutivo al desarrollar las atribuciones otorgadas en el numeral primero del Artículo 35 de la Ley 62 de 1993, y el decreto 1029 de 1994, fue expedido en “desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992” y no en la ley 62 de 1993; brindó respuesta en los siguientes términos:

*“...en el decreto 1091 se consagró – artículo 110 – una definición de familia igual a la contemplada en el artículo del mismo número del anterior decreto 1029 de 1994, el cual prácticamente se reprodujo en el nuevo ordenamiento, pero curiosamente no se incorporó el artículo 111 que hacía la remisión expresa para efectos prestacionales, a los estatutos del personal de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los funcionarios del Ministerio de Defensa, en el sentido de extender los beneficios que se conceden en estos al cónyuge y los hijos, y a la familia del miembro del nivel ejecutivo, conforme a la definición de familia señalada en el artículo 110”* (Negritas ajenas al texto, son para resaltar).

Por lo cual la sala respondió.-

*En la actualidad es procedente aplicar los artículos 110 y 111 del Decreto 1029/94, referentes a la definición de familia, como aquella que, para los efectos de este decreto, esta constituida por el cónyuge o compañero permanente del miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, así como por sus hijos menores de 21 años, los estudiantes hasta la edad de 24 años y los hijos inválidos absolutos, siempre y cuando unos y otros dependan económicamente del miembro del nivel ejecutivo; igualmente , procede la remisión de los decretos 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, en el sentido de que los derechos allí consagrados para el cónyuge y los hijos de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, se reconocerán y pagarán a la familia del miembro del nivel ejecutivo, de conformidad con la definición establecida.* (Negritas para resaltar).

Como se puede observar, el mismo Consejo de Estado, en su concepto es claro en manifestar que los derechos consagrados en el decreto 1212 y 1213 de 1990 se deben cancelar a los miembros del nivel ejecutivo que antes de ingresar a éste escalafón eran agentes, o suboficiales por cuanto continúan manifestando “De otra parte, se podría pensar que en el artículo 113 del Decreto 1091 de 1995 al disponer que ese Decreto” deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Sobre la remisión a los estatutos de las fuerzas militares y la Policía, “pero se observa que dicha norma no es contraria a lo establecido en el Decreto 1091 de 1995, por cuanto no se opone, ni esta en contravía de sus disposiciones, antes bien le da coherencia al hecho de que en el artículo anterior, el 110, se define la noción de familia, toda vez que el artículo 111 remite a esa noción para darles efectos en relación con los derechos patrimoniales” (negritas y subrayado para resaltar).

Y acentúa el honorable Consejo de Estado

“finalmente, el elemento sistemático de interpretación de las normas también interviene, ya que los dos artículos, el 110 y el 111 del Decreto 1029 de 1994 relacionados con la familia (en la cual se menciona al cónyuge o compañero (a) permanente del miembro del nivel ejecutivo de la Policía) y con la remisión a los Estatutos del personal de las fuerzas militares y Policía Nacional, deben ser entendidos en consonancia y como una aplicación del artículo 42 de la Constitución Política, en cuyo primer inciso se consagra éste principio.” La familia

es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de formarla.

Por lo anterior la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía nacional y mucho menos la Policía Nacional no podía por ningún motivo extinguirle el pago del **subsidio familiar de su esposa e hijos**, en este caso de sus tres hijos; ya que no se llenaban los requisitos exigidos en el Decreto 1212 de 1990 para extinguirlo, así como lo consagrado en el Código Contencioso Administrativo, por el contrario el mismo Decreto 1212 lo estipula como partida liquidable así:

#### **DE LAS PRESTACIONES POR RETIRO**

**Artículo 140. BASES DE LIQUIDACION.** *A partir de la vigencia del presente decreto, al personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que sea retirado del servicio activo se le liquidará las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas, así:*

1. Sueldo básico
2. Prima de actividad en los porcentajes previstos en este estatuto
3. Prima de antigüedad
4. Prima de oficial diplomado en academia superior de Policía, en las condiciones indicadas en este estatuto.
5. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad
6. Prima de vuelo en las condiciones establecidas en este decreto
7. Gastos de representación para oficiales
8. Subsidio familiar. En caso de las asignaciones de retiro y pensiones, se liquidará conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de este estatuto, sin que el total por este concepto sobrepase el cuarenta y siete por ciento (47%) del respectivo sueldo básico.

**Parágrafo.** *Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en este estatuto, serán computables para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensiones, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.*

Igual situación ocurre con las primas de actividad y antigüedad establecidas en el Título IV de la norma ídem, “**DE LAS ASIGNACIONES, PRIMAS, SUBSIDIOS,...**” además de su asignación mensual, las primas contempladas en el artículo 141 Artículo 141. COMPUTO PRIMA DE ACTIVIDAD. A los oficiales suboficiales que se retiren o sean retirados del servicio activo a partir de la vigencia del presente decreto, para efectos de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales, la prima de actividad de les computará de la siguiente forma:

(..... )  
(.....)

- c. Para oficiales y suboficiales con veinte (20) o más años de servicio, pero menos de veinticinco (25), el veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico.
- d. Para oficiales y suboficiales con veinticinco (25) o más años de servicio, pero menos de treinta (30), el treinta por ciento (30%) del sueldo básico.
- e. Para oficiales y suboficiales con treinta (30) o más años de servicio, el treinta y tres por ciento.

En decreto Posterior también el legislador resalta la inclusión de las partidas que aquí se están solicitando en las partidas para asignación de retiro, Decreto 4433 de 2004 así:

**DECRETO 4433 DE 2004**  
(diciembre 31)

*por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.*

#### **DISPOSICIONES GENERALES**

### **CAPITULO UNICO**

#### **Campo de aplicación**

*Artículo 1°. Campo de aplicación. Las disposiciones aquí contenidas se aplicarán a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y a los Soldados de las Fuerzas militares, en los términos que se señalan en el presente decreto.*

*Artículo 13. Partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:*

*13.1 Oficiales y Suboficiales:*

*13.1.1 Sueldo básico.*

*13.1.2 Prima de actividad.*

*13.1.3 Prima de antigüedad.*

*13.1.4 Prima de estado mayor.*

*13.1.5 Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6° del presente Decreto.*

*13.1.6 Gastos de representación para Oficiales Generales o de Insignia.*

*13.1.7 Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro.*

*13.1.8 Duodécima parte de la Prima de Navidad liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro*

**PRIMA DE ACTIVIDAD “Artículo 68.** Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, en servicio activo, tendrán derecho a una prima mensual de actividad, que será equivalente al treinta y tres por ciento (33%) del respectivo sueldo básico....-

**PRIMA DE ANTIGÜEDAD, “Artículo 71.** Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, a partir de la fecha en que cumplan quince (15) y diez (10) años de servicio, respectivamente, tendrán derecho a una prima mensual que se liquidará sobre el sueldo básico, así:” .....b. Suboficiales.

A los diez (10) años, el diez por ciento (10%) y por cada año que exceda de los diez (10) ,el uno por ciento (1%) más....a partir de la fecha en que cumplan diez (10) años de servicio tendrán derecho a una prima mensual de antigüedad que se liquidará sobre el sueldo básico, así: a los diez (10) años, el diez por ciento (10%) y por cada año que exceda de los diez (10), el uno por ciento (1%) más.”

**SUBSIDIO FAMILIAR: Artículo 82..** A partir de la vigencia del presente decreto los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, en servicio activo, tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así:

a. Casados el treinta por ciento (30%), mas los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo.

b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlos, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. del presente artículo.

c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás , sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).

Parágrafo 1o. El límite establecido en el literal c. de este artículo no afectará a los oficiales y suboficiales que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1969, estuviesen disfrutando o tuviesen derecho a disfrutar, de porcentajes superiores al diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificaciones.

Así mismo con el artículo “**214. DISTINTIVOS DE BUENA CONDUCTA PARA SUBOFICIALES.** A partir de la vigencia del presente decreto, los distintivos de buena conducta, darán derecho a los suboficiales en servicio activo y percibir una bonificación mensual equivalente al uno por ciento (1%) del respectivo sueldo básico por cada distintivo, sin que el total por este concepto pueda sobrepasar el cinco por ciento (5%).*...A partir de la vigencia del presente Decreto, los distintivos de buena conducta, darán derecho a los Agentes en servicio activo a percibir una bonificación mensual equivalente al uno por ciento (1%) del respectivo sueldo básico por cada distintivo, sin que el total por este concepto pueda sobrepasar el cinco por ciento (5%).*”

La Ley sigue con la protección a los derechos y garantías al continuar sosteniéndolos en la ley 923 de 2004, en el artículo 2º: “...OBJETIVOS Y CRITERIOS. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el gobierno nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:

2.1. El respeto de los derechos adquiridos. **Se conservaran y respetarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de las mismas.**” (Negrillas y subrayado para resaltar)

Por lo cual se observa que al extinguirse unilateral, inconstitucional e ilegalmente por parte de la Caja de Sueldos de Retiro- Policía Nacional de Colombia las garantías, las prerrogativas, los beneficios que venía recibiendo mi poderdante y que como dije anteriormente son **IRRENUNCIABLES,** se le creó otro problema grave al momento de acceder a la asignación de retiro por cuanto la Caja de Sueldos de Retiro no tiene en cuenta estos porcentajes para aplicar la regla que exige el artículo arriba mencionado y si por el contrario no contabiliza la prima del nivel ejecutivo para incrementar esta, **desvirtuándose con esto que la creación del nivel ejecutivo era para mejorar los salarios y prestaciones,** por lo que estas primas, bonificaciones, recompensas y subsidios deben integrarse a la liquidación de la Asignación de Pensión del señor JOSE WILSON PRIETO HURTADO, en los periodos mensuales correspondientes.

Con la actitud desplegada por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO CASUR - Policía Nacional desconoció lisa y llanamente la legislación anterior que generó derechos prestacionales mas favorables que el determinado por ella, y no se sabe basados en qué norma?, lo que conduce a la vez a una flagrante vulneración a la Ley 4ª de 1992, Ley marco para la reglamentación de prestaciones y salarios, conforme a la cual “...en ningún caso se podrá desmejorar sus salarios y prestaciones sociales.”

La expresión “**en ningún caso**” contenida en el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992, prohíbe absolutamente al ejecutivo desmejorar los conceptos laborales al utilizar las facultades reglamentarias a él conferidas. Ésta prohibición la ratifica en el artículo 10 ídem, que establece: “Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma **carecerá de todo efecto...**” (Negrillas y subrayado para resaltar).

Las normas que regulan el nivel ejecutivo no han dispuesto la derogatoria expresa de ese régimen más favorable, ya que irían en contra expresa prohibición de la Ley 4 de 1992 que le prohíbe al gobierno Nacional desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los empleados públicos, en este caso de los

homologados de la Policía Nacional, con grave violación del derecho al trabajo, del principio de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, con menoscabo de los derechos de los trabajadores, irrespetando los derechos, garantías y beneficios adquiridos, vulnerando la primacía de la realidad frente a las normas y recortando sus ingresos, sin consentimiento de los servidores públicos. La única finalidad que se buscaba en el Gobierno era mejorar el ingreso de los miembros de la Policía Nacional, tal como se dijo anteriormente, en solución contra la corrupción. (Negrillas y subrayado para resaltar). Entonces ¿qué está sucediendo?, que lo que buscaba el Gobierno con la reforma Institucional no se está dando por determinaciones ajenas a la Constitución y la Ley y que en este momento se desconoce qué personaje siniestro para esa época tomó la determinación de suprimir estas garantías y con fundamento en que norma lo hizo, lo que sí está claro es que se está violando la Constitución y la Ley.

Es tan claro que las normas que desarrollaban la carrera del nivel ejecutivo protegía a quienes perteneciendo a la Policía Nacional, protección que consistía en que no podían ser **DESMEJORADOS** y que las partidas computables para el pago del salario mensual y de asignación de retiro contempladas en el Decreto 1091 de 1995, regía para los que ingresaran nuevos a la Institución y no para los que ya pertenecían a la misma y se pasaran al Nivel Ejecutivo pues a estos se les debe pagar las partidas que venía percibiendo en la norma anterior por ser más favorable, **además del estímulo creado que era una prima denominada del nivel ejecutivo, prima que no es la misma a la prima de actividad como en muchas ocasiones lo ha sostenido la Caja de Sueldos y Policía Nacional, toda vez que el decreto 1091 de 1995 no consagró en ninguno de sus apartes que esta prima reemplazaría la prima de actividad. Esta prima era para privilegiar a los que se pasaran al nivel ejecutivo, pues de lo contrario no tenía sentido alguno que un agente o suboficial se pasara a dicho nivel si iba a ver reducidas sus asignaciones mensuales y no tener mejora salarial y prestacional pero en cambio si trabajar cinco años más.**

Entonces creó estos beneficios como política para incentivar el traslado al Nivel Ejecutivo para mejorar la calidad de vida, la profesionalización para un mejor desempeño de la función.

**Sobre el particular es preciso traer a colación lo que ha dicho el Honorable Consejo de Estado:**

“

(...)

*NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL - Creación. Evolución normativa / PENSION DE SOBREVIVIENTE PARA MIEMBROS ACTIVOS DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICIA NACIONAL - Presupuestos para su reconocimiento. Normatividad / DERECHO A LA IGUALDAD - No vulneración, ya que el trato diferente que se dio entre los activos y los nuevos en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, estuvo objetiva y razonablemente justificado.*

*Los Decretos 1091 del 27 de junio de 1995 y 4433 de 31 de diciembre de 2004, previeron en sus artículos 70 y 27 parágrafo la pensión de sobreviviente para los miembros activos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que murieran en actos especiales de servicio, cualquiera que fuera el tiempo de servicio, sobre el 100% de las partidas computables consagradas en los artículos 49 y 23, respectivamente, a saber: Sueldo básico, prima de retorno a la experiencia, subsidio de alimentación, doceava de la prima de navidad, doceava de la prima de servicio y doceava de la prima de vacaciones. En ese orden se tiene que las normas posteriores que contemplaron la prestación en estudio, no sólo*

protegieron las condiciones prestacionales con que venían los miembros que ingresaron al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, en lo que a la pensión por muerte en actos especiales del servicio se refiere, sino que las mejoraron toda vez que dicha prestación se reconoce sobre el 100% de las partidas computables cualquiera que fuera el tiempo de servicio, lo cual guarda armonía con la constitución y las leyes laborales, en cuanto obligan al empleador a conservar unos beneficios mínimos sobre los cuales puede agregar mayores y mejores prerrogativas, pues lo que es prohibido son las desmejoras. Considera la Sala que cuando el Legislador estableció la pensión por muerte en actos especiales del servicio en el artículo 27 del Decreto 4433, diferenciando a quienes ingresaran al Nivel ejecutivo a partir de la entrada en vigencia de dicho precepto con los que ya hacían parte de ella, lo que hizo fue darle cumplimiento a las normas creadoras del Nivel Ejecutivo, en el sentido de brindarle una especial protección para los miembros de la Policía que atendieran el llamado institucional para profesionalizar sus labores. Así las cosas, el parágrafo demandado del artículo 27, si bien consagró un trato diferenciado entre los miembros vinculados al nivel ejecutivo al momento de entrar en vigencia el citado Decreto con el personal que ingresara con posterioridad, no vulneró el derecho a la igualdad, pues como ya se vio, la diferenciación no se produjo entre iguales, pues a los activos se les debía respetar la especialísima protección con que venían revestidos por las normas de creación, que, para recordar, previeron que sus condiciones laborales no podían ser desmejoradas al pasar al nivel ejecutivo. El trato diferente que se dio entre los activos y los nuevos en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, estuvo objetiva y razonablemente justificado, razón por la cual el cargo endilgado al parágrafo demandado no prospera. **NOTA DE RELATORIA:** Esta providencia fue proferida por la Sala Plena de esta Sección.

**CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA** Consejero ponente: **LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO** Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 11001-03-25-000-2005-00237-01(10024-05)Actor: **PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA** Demandado: **GOBIERNO NACIONAL**”(Negrillas y subrayado mío. )

Igualmente la Constitución Política de Colombia de 1991, estableció en su “artículo 29.- El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...”, la Policía Nacional, nunca efectuó un debido proceso para extinguir sus derechos adquiridos, jamás lo hizo, por eso el nunca ejerció su defensa para obtener de parte de la administración un debido proceso y que esta accediera a mis pretensiones, por cuanto de un solo borrón, sin nacer a la vida jurídica un acto administrativa que le extinguiera esos derechos, lo hizo de hecho y no de derecho. En concordancia con los artículos 42 y 53 de la norma ídem, en éste último esta la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales,...” situación mas favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” (negrillas y subrayado para resaltar).

El Código Sustantivo Laboral, en su Título V, salarios- artículo 127.-Subrogado ley 50 de 1990 artículo 14.- **ELEMENTOS INTEGRANTES**, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, **sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales....”**

La CAJA DE SUELDOS DE RETIRO -Policía Nacional, igualmente trasgredió el artículo **149 del Código Sustantivo del Trabajo**, y por último respecto al Código de marras, violó el artículo 340, por cuanto las prestaciones eventuales o causadas son irrenunciables, mucho menos extinguibles por parte del patrono.

Me permito transcribir para referencia del señor Director, apartes del expediente número 10426 de 19 de junio de 1997, actor ARTURO AVELLANEDA, Consejero Ponente DR. Carlos A Orjuela Góngora, en donde se anuló la expresión del

artículo 2º del Decreto 1133 de 1994 que se transcribe entre paréntesis y se expuso:

*“Fuera de ello, es incuestionable que la constitución contempla una protección especial para todas las modalidades de trabajo (art. 25), como también otros principios como los de igualdad de oportunidades para los trabajadores, la estabilidad en el empleo, la **irrenunciabilidad** de los beneficios mínimos consagrados en normas laborales, la situación más favorable para aquellos en caso de duda respecto de la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, todos de obligatorio cumplimiento (artículo 53).*

*Sin perjuicio de la facultad que tiene el legislador para modificar la normatividad laboral, no puede dejarse de lado que cuando se varía la misma se afectan las relaciones laborales en curso y por consiguiente es menester garantizar que no se menoscaben o desconozcan situaciones jurídicas consolidadas o constituidas, toda vez que ley debe regir hacia futuro y no debe afectar derechos adquiridos.”*

En el mismo sentido pueden verse, entre otras, las sentencias dictadas dentro de los expedientes números 10342, 10532, 10507, 10502 y 10698, en los que no se anuló la decisión del gobierno de permitir que los servidores públicos del Distrito vinculados a la expedición de los Decretos 1133 y 1808 de 1994, continuaran con el régimen prestacional, que comprende el señalado por los empleados públicos de la rama ejecutiva del poder público, mas las prestaciones que se les venían reconociendo y pagando ( artículo 2 y 1 respectivamente).

En sentencia C-691 de 2003, MP. Clara Inés Vargas, expresó: “La Corte estima que dicho cuestionamiento corresponde a una indebida interpretación de la norma, pues ella no está diseñada para desconocer situaciones ya consolidadas sino para regular las condiciones de aquellos agentes y suboficiales que con posterioridad a su entrada en vigencia decidan ingresar al nivel ejecutivo de la Policía, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la institución. Así mismo, **del contenido del parágrafo no se desprende que se autorice despojar a los agentes y suboficiales de sus honores o pensiones como equivocadamente lo sugiere el demandante.**

Vale la pena recordar que **con el fin de garantizar las condiciones de los miembros de la Policía que ingresarían a la estructura creada por la Ley 180 de 1995, la norma que autorizó al Presidente para desarrollar el nivel ejecutivo señaló lo siguiente: “La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo”** [19]. Dicha precisión se explica ante la creación de una nueva estructura jerárquica y debido a la facultad que en aquel entonces se le dio al Presidente para regular asuntos sobre “asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales”, la cual no se confirió en el caso de la Ley 578 de 2000.”

Ahora bien, **la norma objeto de demanda nada tiene que ver con las condiciones de quienes siendo agentes o suboficiales ya habían ingresado al nivel ejecutivo de la Policía y tampoco altera su situación,** lo cual reafirma la equivocada interpretación del actor. **Si la norma no modifica el régimen salarial y prestacional de los agentes y suboficiales,** según fue explicado anteriormente, no se ve cómo pueda llegar a desconocer los derechos mínimos de los trabajadores o a privarlos de sus honores y pensiones.



Qué quiere decir esto? Que se le deben pagar las primas, subsidios, bonificaciones y cesantías con retroactividad que se me venían cancelando como suboficial de la Policía Nacional y las primas y demás garantías como miembro del nivel Ejecutivo de la Policía nacional, porque ese era el deber ser, el espíritu de la nueva normatividad, el de mejorar el salario de los funcionarios que se pasaran al nuevo nivel.

La Caja de Sueldos de Retiro -Policía Nacional, nunca cumplió con la Ley, solo de hecho sin ningún soporte jurídico violó la Ley y la constitución al suprimir Ipso facto de manera arbitraria unas prestaciones o salarios que yo venía devengando, violando además de los anteriores preceptos los artículos 44, 47, 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo, por lo cual al no efectuar los procedimientos señalados en el Decreto 1212 de 1990 y decreto 1029 de 1994 en su artículo 113 vigente para la época de la nefasta toma de decisión de suspender estas garantías, lleva a concluir que la administración no cumplió con lo ordenado en la Ley y por consiguiente se debe dar cumplimiento al artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, por no llenarse estos requisitos y al ser así, estos no producen efectos jurídicos.

Como se puede apreciar la ley protegía a aquellos policiales que se pasaran al nivel ejecutivo y fundamentado en ello el Honorable Consejo de estado en providencia fechada el 05 de febrero de 2004 dijo:

***“ASIGNACIÓN DE RETIRO – Personal trasladado al nivel ejecutivo. Régimen aplicable.***

***EL LEGISLADOR AL DETERMINAR LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL NIVEL EJECUTIVO EN LA POLICÍA NACIONAL PREVIÓ LA POSIBILIDAD DE TRASLADO DE LOS SUBOFICIALES VINCULADOS, CONSERVANDO LAS PRERROGATIVAS SEÑALADAS PARA SUS GRADOS EN DISPOSICIONES ANTERIORES. DE ESTE MODO, PRESERVÓ LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y LAS EXPECTATIVAS SOBRE RECONOCIMIENTOS FUTUROS COMO LA PENSIÓN O LA ASIGNACIÓN DE RETIRO. EN CRITERIO DE LA SALA, EL ASUNTO EXAMINADO CORRESPONDE A UN INCENTIVO QUE LA LEY PRETENDIÓ OTORGAR A LOS MIEMBROS ACTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL PARA QUE INGRESARAN AL NIVEL EJECUTIVO.***

***ASÍ LAS COSAS, EN EL ASUNTO MATERIA DE ESTUDIO SE TIENE QUE, EL DEMANDANTE AL TRASLADARSE AL NIVEL EJECUTIVO QUEDÓ SOMETIDO AL RÉGIMEN PREVISTO PARA ESE PERSONAL, SALVO EN LO RELATIVO A SUS DERECHOS Y PRESTACIONES, TODA VEZ QUE, CONFORME A LAS CITADAS NORMAS LEGALES, ESAS CONDICIONES NO SE PODÍAN DESMEJORAR EN NINGÚN ASPECTO, MOTIVO POR EL CUAL LA ENTIDAD ACUSADA NO DEBIÓ APLICAR LA NORMA GENERAL SOBRE RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO PARA EL NIVEL EJECUTIVO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 51 DEL DECRETO 1091 DE 1995, QUE EXIGE 20 AÑOS DE SERVICIO PARA GOZAR DE ESE DERECHO, SINO EL ARTÍCULO 144 DEL DECRETO 1212 DE 1990, QUE SEÑALA UN TIEMPO EQUIVALENTE A 15 AÑOS DE SERVICIO, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 7° DE LA LEY 180 DE 1995 Y 82 DEL DECRETO LEY 132 DE 1995.***

***EN CONSECUENCIA, ES PRECISO CONCLUIR QUE LAS NORMAS SOBRE DERECHOS PRESTACIONALES CONTENIDAS EN EL DECRETO 1091 DE 1995 RIGEN PARA LAS PERSONAS QUE INGRESARON COMO NUEVAS A LA INSTITUCIÓN EN EL NIVEL EJECUTIVO NO PARA LOS SUBOFICIALES TRASLADADOS.” (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUB SECCION "D" EXPEDIENTE No. 01-6432- Magistrada Sustanciadora: Doctora María del Carmen Jarrín Cerón).***

El decreto ley 132 de 1995, mediante el cual se desarrolla la carrera profesional del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, en su artículo 13, regula:

***“ARTÍCULO 13. INGRESO DE AGENTES AL NIVEL EJECUTIVO. Podrán ingresar al primer grado del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, los agentes en servicio activo siempre y cuando reúnan los siguientes requisitos:***

- 1. Solicitud escrita a la Dirección General de la Policía Nacional.***

2. *Acreditar el título de bachiller en cualquier modalidad.*

3. *Evaluación y concepto favorable del Comité de Evaluación del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.*

*PARÁGRAFO 1o. Los agentes en servicio activo que no sean bachilleres, tendrán plazo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del presente decreto, para acreditar este requisito, o en su defecto, deberán adelantar y aprobar un curso de nivelación académica de acuerdo con reglamentación que expida la Dirección General de la Policía Nacional.*

***PARÁGRAFO 2o.** Los agentes que al momento de ingresar al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, hayan cumplido ocho (8) o más años de servicio activo como tales, ingresarán al grado de Subintendente, sin perjuicio de los requisitos exigidos en los numerales 1,2,y 3 de este artículo."*

Mi poderdante lo hizo instado por las prebendas y mejora laboral y prestacional que ofrecía los mandos superiores, pero nunca expresando en forma expresa o tacita la renuncia a sus derechos Salariales y prestacionales y mucho menos con la desmejora posterior que introdujo la Policía Nacional al incluir un grado más, incrementar el termino de ascenso y disminuir sus ingresos salariales como consecuencia del tiempo que se debía esperar para ascender, de allí que se le deban respetar las condiciones de ingreso y liquidarle o reajustarle la pensión en el grado de COMISARIO, que fue el escalafón ofrecido, y los requisitos cumplidos por PRIETO HURTADO a su ingreso al Nivel Ejecutivo.

Y, el artículo 82 del decreto ley mencionado, expresa que:

*"ARTICULO 82.- Ingreso al nivel ejecutivo. El ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar, ni desmejorar, en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional."* (Negrilla fuera de texto).

**Decreto 1212 de 1990 Artículo 143. CESANTIA E INDEMNIZACIONES.** *El oficial o suboficial de la Policía Nacional que durante la vigencia de este decreto se retire o sea retirado del servicio activo por cualquier causa, tendrá derecho a que el tesoro público le pague, por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un (1) mes de haberes correspondientes a su grado por cada año de servicio o fracción de seis (6) meses o más, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 140 y a las indemnizaciones que legalmente le puedan corresponder liquidadas igualmente conforme al citado artículo.*

El señor JOSE WILSON PRIETO HURTADO en ningún momento ha renunciado al reconocimiento y pago de las primas, subsidio y bonificaciones motivo de convocatoria **ni al beneficio de retroactividad de las cesantías** puesto que este debe hacerse de manera voluntaria, expresa y ante notario y tampoco el Decreto 1091 de 1995 consagró que el que se trasladara al nivel ejecutivo perdería dicho derecho.

La irrenunciabilidad a los beneficios mínimos de las leyes laborales, como lo es, en este caso, la retroactividad de las cesantías y demás emolumentos que devengaba hasta antes de trasladarme al Nivel Ejecutivo, está expresamente consagrada en el artículo 53 de la Constitución como un principio mínimo fundamental de los trabajadores.

Igualmente para la reliquidación de la asignación de retiro se debe tener en cuenta el Convenio 95 aprobado por la Ley 54 de 1962, en los que se define "salario" como toda la retribución que se recibe por el trabajo. La Corte Constitucional, trajo primero a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y sostuvo lo siguiente: (...). De acuerdo con lo expuesto por las dos altas Cortes, considera la Sala que no existe ningún precepto constitucional que impida al Legislador disponer que determinada prestación social se liquide sin

consideración al monto total del salario del trabajador, es decir, sólo con algunos elementos salariales, o lo que es mejor, corresponde al Legislador definir los elementos salariales que constituirán factor de liquidación de una prestación determinada, facultad que le compete legítimamente en desarrollo de la Constitución. Así, la distinción entre elementos salariales y factores salariales implica, que la sumatoria de los primeros corresponde al salario y que los segundos concretan por disposición expresa del Legislador, los elementos salariales que deben tenerse en cuenta para calcular una determinada prestación social de conformidad con cada régimen prestacional aplicable.

Todo lo anterior en concordancia con:

La ley 4ª de 1992, artículo 2º literal a).

Decreto 132 de 1995, artículo 82.

Ley 180 de 1995, artículo 7 parágrafo.

En conclusión la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional debe proceder a reconocer e incluirle en su asignación mensual de Retiro a mi Mandante y pagar las prestaciones salariales adeudadas desde la fecha en que se jubilo con su pensión de retiro, y que venía devengando al momento de homologarse al nivel ejecutivo ya que el legislador al determinar la creación del Nivel Ejecutivo conservó las prerrogativas señaladas para los grados en normas anteriores, siendo éste un estímulo para el que decidiera pasarse a dicho régimen de carrera, debido al momento crítico por el que estaba atravesando la Policía nacional en ese momento.

Por lo tanto debe proceder a **reliquidar** su asignación de retiro, teniendo en cuenta para el efecto los factores primas (de actividad y antigüedad), subsidios (por su esposa e hijos), bonificaciones (por buena conducta), y demás prestaciones laborales a que tiene derecho liquidadas sobre el sueldo básico devengado en servicio activo; con base en el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, en aplicación al principio de favorabilidad, incluyendo además la prima del Nivel Ejecutivo en el porcentaje del veinte (20%), por ser factor salarial, igualmente deberá **reliquidar sus cesantías** las cuales deben ser pagadas con retroactividad, por cuanto al pasarse al Nivel Ejecutivo en ningún momento hubo retiro del servicio, retroactividad que debe incluir la prima del Nivel Ejecutivo en el porcentaje del veinte (20%). Teniendo en cuenta además que no puede haber desmejora alguna en la situación de quienes para ese momento estaban en servicio activo en la Policía Nacional.

Debiéndose por lo tanto pagar los valores correspondientes a las sumas reclamadas dejadas de liquidar y cancelar debidamente indexadas a la fecha que se produzca el pago, junto con intereses si a ello hubiere lugar.

## VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

- Constitución Política de Colombia artículos 2º, Ljo, 5º, 6º, 13, 29, 48, 53, 83, 84, 121 y 220
- Ley 4ª de 1992, artículos 1º, 2º Numeral a) y 10.
- Ley 180 de 1995, artículo 7º parágrafo.

- Decreto 1212 de 1990, Título IV artículos: 65 y ss Y 214
- Decreto 1029 de 1994, artículos '11 -y1'13
- Decreto Ley No 132 de 1995, artículo 82
- Decreto 4433 de 2004.
- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP. SUSANA MONTES DE ECEHEVERRI. Rad 1.567, Auxilio de Cesantías retroactivas
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente. DR. HECTOR J. ROMERO DIAZ, Rad. I 25000232700020010064201.
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
- Segunda, MP. DR. ALBERTO ARANGO MANTILLA, Pad. 1100103250020040010901 Nro Interno 1240-2004.
- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
- Segunda, ACTOR MIGUEL ANGEL MORENO RAMIREZ, Rad I 2500023250020010643201.
- Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil del consejo de Estado, Rad. 886 CP. CESAR HOYOS SALAZAR, fecha 24 de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996).- ACTOR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.
- Circular Nro 003 OFPLA-UDES0-175 del 3 de Enero de 1997, suscrita por el Director General Encargado De la Policía Nacional, Mayor General LUIS ENRIQUE MONTENEGRO RINCO.
- CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, CONSEJERO PONENTE: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009), EXP. N° 11001 03 25 000 200500237 01 , No. Interno: 10024-05, ACCION DE NULIDAD, Actor. PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA.
- Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, CP. SUSAN MONTES DE ECEHEVERRI. Rad 1.567, Auxilio de Cesantías retroactivas.
- Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda. **CP.ALFONSO VARGAS RINCON. Expediente 0290-06 (1074-07). De abril 12 de 2012.** Actor JUAN CARLOS BELTRAN BEDOYA. Decretos del Gobierno. Declara la Nulidad del párrafo segundo del artículo 45 del decreto 4433 de 2004, con lo cual se ratifica que el Decreto a tener en cuenta para la asignación de retiro y lógicamente Liquidación prestacional del personal Homologado es el Decreto 1212 y 1213 de 1990.
- En reciente pronunciamiento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo como fundamento en su argumentos lo establecido por el Consejo de Estado como órgano de Cierre de la Jurisdicción, ordeno la re liquidación de los factores aquí demandados en sentencia de fecha 01-03-2012. Expediente 2007-

00615-01.

- En ese mismo orden de ideas y para no hacer más extensos mis argumentos, refiero la sentencia del Juzgado Octavo de Descongestión del Circulo de Bogotá d.C., quien mediante Sentencia de fecha 29 de julio de 2011, expediente 2010- 00358 resolviendo nulidad y restablecimiento del Derecho- Reajuste Prestacional, en contra de la Policía Nacional, ratifica lo expuesto por esta Defensa en los fundamentos de Derechos “ No se podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes ingresaron al Nivel Ejecutivo estando al servicio de la Policía Nacional..”.

## VII. CUANTÍA

En lo que tiene que ver con la estimación razonada de la cuantía en pesos, me permito realizarla de la siguiente manera:

Como se ha expresado a lo largo de este escrito hay una desmejora e la liquidación de las partidas Liquidables a mi poderdante, no solo por la no inclusión del las primas y bonificaciones a que tiene derecho, sino también por que dichas partidas no se hicieron con el grado correspondiente ya que cuando el se homologo no existía el grado de Intendente Jefe, y desde ahí empezó la desmejora y vulneración de sus derechos. Por lo tanto a pesar de que la estimación la hago respecto al sueldo que le liquido la Caja de Sueldos, este se debe incrementar al grado inmediatamente superior, o sea COMISARIO. Y este reajuste se debe ver reflejado en cada una de las asignaciones mensuales que este perciba de CASUR, incluido el IPC, esta estimación se hace al momento de presentar la conciliación.

1. Sueldo Básico año 2011: \$ 1.910.265.00 pesos.

El 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011, el periodo excluido fue de 12 meses, 365 días; en consecuencia los haberes que no le fueron cancelados son:

**Prima de actividad (50 %): \$ 11' 620.778**

- **Prima de antigüedad (23.26%): \$ 5 ' 405.986**
- **Bonificación de buena conducta (5%): \$ 1'162.068**
- **Subsidio familiar en un porcentaje del (39%): \$ 9.064.207**

**SUBTOTAL: \$ 27'253.039**

2. Sueldo Básico año 2012 fue de **\$ 2'024.881.**

Del 01 de Enero de 2012 al 31 de marzo de 2012, el periodo excluido fue de tres (03) meses, noventa (90) días; en consecuencia los haberes que no le fueron

cancelados son:

- **Prima de actividad (50%):** \$ 3.037.321
- **Prima de antigüedad (23.26%):** \$ 1'412.962
- **Bonificación de buena conducta (5%):** \$ 303.732
- **Subsidio familiar en un porcentaje del (39%):** \$ 2' 369.111

**SUB TOTAL: \$ 7' 123.126**

**SUBTOTAL: TREINTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES PESOS ( \$ 34'376.165)**

### **3. DAÑOS Y PERJUICIOS MORALES:**

Por los daños y perjuicios que se le han causado a mi poderdante, por la irregular liquidación de la asignación de retiro de que ha sido víctima, se estima que es el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales vigentes ( \$ 56' 670.000,00)

**TOTAL: NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS. ( \$ 90' 956.165)**

Toda vez que el mismo Honorable Consejo de Estado en sentencia del 4 de septiembre de 2008 y ratificada nuevamente en Sentencia del 12 de abril de de 2012, expediente 0290-06(1074-07) Consejero Ponente ALFONSO VARGAS RINCON, cuando al fallar sobre la demanda impetrada por el señor JUAN CARLOS BELTRAN BEDOYA EXPONE, SOBRE LA DESMEJORA PARA LOS AGENTES Y SUBOFICIALES QUE SE HOMOLOGARON AL NIVEL EJECUTIVO DISPONE LO SIGUIENTE:

“ ..En consecuencia la norma acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, excedió lo dispuesto por la Ley Macro e invadió competencias legislativas, pues modifico lo referente al tiempo mínimo para obtener la asignación de Retiro del personal del Nivel Ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraba en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas legítimas....

FALLA:

(...)

**DECLARASE** La nulidad del parágrafo 2° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, expedido por el Gobierno

Nacional, por medio del cual fija el Régimen Pensional y de **Asignación de Retiro de los miembros del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional**, en desarrollo de lo dispuesto por la Ley 923 de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Sentencia.( subrayado y negrilla de esta defensa).( anexo copia sentencia).

### **VIII. PRUEBAS Y ANEXOS**

Acompaño como pruebas las siguientes para que se sirva de soporte a lo aquí expuesto, las cuales se adjuntan en Un (1) juego para la Entidad Convocada y una copia de la solicitud para el archivo del despacho.

1. Poder debidamente conferido.
2. Acta de Conciliación.
3. Certificación de la Procuraduría donde se declara fallida la conciliación.
4. En dos folios (2) Recibido original de Derecho de Petición que se envió con fecha 07 de Octubre de 2011 al señor Director General de la Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional, en el cual solicite fueran canceladas las primas, subsidios, recompensas y bonificaciones a que por Constitución y a la Ley tenía derecho JOSE WILSON PRIETO HURTADO y que la Policía Nacional dejó de cancelarle a mi poderdante cuando de Agente se pasó al nuevo Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, siendo derechos que tenía adquiridos.
5. Original del acto demandado, en ocho folios (8) folios, Oficio No. 521 GAG-SDP de fecha 01 de Febrero de 2012, en el cual contestan parcialmente el Derecho de Petición, después de tres meses, negando las pretensiones. En esta documentación incluyen la hoja de servicios y la resolución expedida por CASUR asignándole la pensión.
6. En un folio Desprendible de sueldo del señor JOSE WILSON PRIETO HURTADO del año 1986.
7. Copia de la Circular 003/ OFPLA-UDESCO-175 del 3 de enero de 1.997, dirigida al Alto Mando Policial del país, signada por el Director General Encargado, en donde les da a conocer sobre la respuesta a la Consulta elevada por el señor Ministro de Defensa Nacional, al Consejo de Estado, respecto a la vigencia de los artículos 110 y 111 del Decreto 1029 de 1.994, en seis (6) folios.
8. Copias de apartes concepto Consejo de Estado, Sala de consulta y Servicio Civil, CP. SUSANA MONTES DE ECHEVERRI, Rad. 1.567 Auxilio de Cesantías
9. Copias de las páginas de presentación del libro POLICIA NACIONAL NUEVA ERA, Modernización Institucional, en dos folios.
10. Fotocopia del periódico “ VAMOS COLOMBIA”, en donde aparece artículo referente a la acción planteada en tres (3) folios.
11. Apartes de la Sentencia del Honorable Consejo –Sala de lo Contenciosos Administrativo, Sección segunda, MP. Dr. ALBERTO ARANGO MANTILLA, Rad.1100103250020050023701 No. Interno 10024-05, Actor PERDO ANTONIO HERRERA MIRANDA, en cinco (5) folios.
- 12..Copia de algunos Apartes de algunas sentencias donde ya se han fallado reconociendo dichos derechos, CONSEJO DE ESTADO Y TRIBUNAL ADVO DE VARIAS CIUDADES.

13. CD-ROM con la grabación de la Comisión accidental del Senado sobre los salarios de la Fuerza Pública- Especialmente sobre el IPC.

### **JURAMENTO EXPRESO**

Desde ya expreso bajo la gravedad del juramento que el suscrito no ha promovido otras Acciones judiciales por los mismos hechos, que ultima unidad laborada fue la escuela de Policía Simon Bolivar en el Valle del Cauca.

### **IX.**

### **NOTIFICACIONES**

La suscrita y mi representado recibo notificaciones personales en mi oficina ubicada en la Avenida Jiménez No. 8A -77 Oficina 703, Tel 2831351, celulares 3142476344 – 3165284109 Bogotá.-. Email notificación que autorizo, mompis2@hotmail.com

A la Caja de Sueldos de Retiro Policía Nacional, representada legalmente por el señor Coronel ® GUSTAVO CAÑAS CARDONA, se puede ubicar en la Carrera 7 No. 13-58 Bogotá, conmutador 2860911 fax (1) 2435281. Email dirección@casur.gov.co, pagina WWW.casur.gov.co

Atentamente,



**IDALIDES SILVA ARTEAGA**  
**C.C. No. 43.098.498 de Medellín**  
**T.P. No. 108739 del C.S. de la J.**



